

El Gobierno admite una mala financiación de la Dependencia

El PSOE ha aprobado en el Congreso una moción presentada por ERC que insta a elevar la previsión presupuestaria para la Ley de Dependencia y a debatir en el seno del Consejo Territorial la separación de las partidas destinadas al nivel mínimo del acordado.

Loreto Mármol, J.M.J. 18/09/2008

La financiación de la Ley de Dependencia es insuficiente. No sólo lo dicen los grupos políticos que conforman la oposición, también lo reconoce el PSOE. El Gobierno se ha comprometido en el Congreso a aumentar la partida mediante una enmienda a la moción presentada por Esquerra Republicana sobre la gestión y financiación de la norma.

El Ejecutivo admite así que una mala previsión. Joan Tardà, diputado de ERC, se mostró satisfecho porque con este pacto "el Gobierno reconoce que las partidas son insuficientes para desplegar la norma". En concreto, el texto insta a aumentar el presupuesto previsto para garantizar el nivel mínimo, según el número de personas evaluadas por el sistema, y a incrementar para el ejercicio 2009 los recursos aprobados en el Consejo Territorial para el nivel acordado con las comunidades, ya que "la cifra estipulada es obsoleta", afirmó.

Asimismo, contempla que el consejo debata de inmediato la separación de las partidas destinadas a financiar el nivel mínimo de servicios de aquellas otras establecidas para sufragar el nivel acordado con las autonomías. "Hasta ahora el presupuesto del Gobierno para hacer convenios con las comunidades estaba siendo mermado por el nivel mínimo, que necesitaba más dinero", explicó Tardà.

El diputado popular, Miguel Barrachina, que votó en contra, consideró que la posibilidad de incluir el diferencial del coste del servicio en la distribución de recursos entre comunidades es "una fuente de desigualdades". En su intervención, insistió en que la gestión es "auténticamente calamitosa" y manifestó que alguien debería decirle al PSOE que la dependencia no nació con este Gobierno. No obstante, Lourdes Méndez, parlamentaria del PP, comentó a Diario Médico que el gasto que asume el Estado es del 12 por ciento, mientras que las regiones aportan el resto. En este sentido, reclamó una financiación local justa y apuntó que para realizar una valoración se hacen cerca de 30 trámites y su coste es de unos 300 euros.

Apoyos a la moción

Por el contrario, Carles Campuzano (CiU) ofreció su apoyo, aunque subrayó que se trata de poner paños calientes a un problema de fondo: si la norma es sostenible en el tiempo. A su juicio, a medio plazo se habrá invertido mucho y lo peor es que no se habrán desarrollado los servicios suficientes. Tampoco obstaculizó la enmienda Emilio Olabarría, del PNV, a pesar de que apuntó que no se están cumpliendo los compromisos en cuanto a presupuestos y, por tanto, el anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de aumentarlo hasta 1.200 millones de euros en 2009 es "una falacia intelectual".

En la misma línea, Olaia Fernández Dávila, afirmó que su bloque, el Grupo Mixto, siempre ha hecho hincapié en la financiación: "Cuando se debatía la ley ya éramos conscientes de que la realidad iba a superar las previsiones". Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, aseguró la semana pasada que el Gobierno está cumpliendo con la memoria económica de la ley (**ver DM del 12-IX-2008**). La diputada no la desdijo, pero le recordó que, en ese caso, "no se están cumpliendo las necesidades reales", y exigió un acuerdo entre Gobierno y regiones sobre las cuantías para 2009 antes de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

Por el momento, se desconoce qué porcentaje estará dispuesto el Gobierno a reconsiderar. Tampoco despejó las dudas la diputada socialista Esperança Esteve, que valoró la moción como "una aportación para seguir construyendo este edificio".

Línea triunfalista

Continuando con el símil, Barrachina dijo a Cabrera que "el cuarto pilar se ha quedado en un modesto ladrillito que mengua a medida que exhibe logros inexistentes". En concreto, se refirió al anuncio a bombo y platillo que hizo Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Política Social, sobre los 345.000 nuevos beneficiarios y los 70.000 nuevos empleos netos (**ver DM del 4-IX-2008**). Además, le recordó que ninguna región ha recibido aún el borrador sobre el convenio de 2008: "La ley está provocando una creciente frustración", a lo que Cabrera contestó que "precisamente porque estamos levantando un sistema se necesita tiempo y acuerdos; no eche agua sobre lo que estamos construyendo".

Ni Soria ni Cabrera dan detalles de la coordinación sociosanitaria en el Senado

La pregunta planteada en el Pleno del Senado por Rosa Nuria Aleixandre, de Convergencia y Unión (CiU), sobre la coordinación entre los ministerios de Sanidad y Educación, Política Social y Deporte para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia se quedó sin respuesta. La encargada de contestar inicialmente era Mercedes Cabrera, responsable del departamento de Educación, pero no acudió a la Cámara Alta, y Bernat Soria, su homólogo en Sanidad, que sí asistió, no quiso dar explicaciones sobre la cuestión planteada por Aleixandre.

Así, el Gobierno sigue sin aclarar las iniciativas que pondrán en marcha para coordinar la atención social y la sanitaria y favorecer, en consecuencia, la atención integral al paciente con algún grado de dependencia. Con este panorama, Aleixandre ha señalado que "la desinformación a la que nos están sometiendo nos da pie a pensar que la relación entre Cabrera y Soria no es buena, que no se entienden y que no han avanzado en su cooperación desde el reparto de competencias tras las elecciones" (**ver DM del 30-VII-2008**).

Diario Médico